



Year 1902—Office, 721, Allen St

Año 1902 Oficinas, calle Allen, 21

Official subscriptions	\$1.75 per month
Private	1.25
Single copy (date of issue).....	.10
(old date).....	.20
Advertisements	10 per line

Subscripción oficial por un mes.....	1.75
Subscripción particular por un mes.....	1.25
Número suelto del día.....	.10
Número atrasado.....	.20
Anuncios la línea	10

Published daily except Mondays

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. at San Juan P. R. as Second class matter.

Year 1902

San Juan Puerto-Rico, Sunday June 22st

No. 144

AVISO.

La Ley sobre municipalidades votada por la última legislatura y aprobada por el Gobernador, se encuentra de venta en esta Imprenta en un folleto, á 25 ctvs ejemplar.

IMPORTANTE.

Ponemos en conocimiento de los Sres. que utilizan la "Gaceta de Puerto-Rico" para la publicación de Edictos judiciales, en asuntos de partes, que publicado por primera vez y no satisfecho su importe, se suspenderán las otras dos publicaciones.

Sucesores de J. J. Acosta,

Puerto-Rico, 9 de Octubre de 1901.

Proprietarios y Editores de la "Gaceta de Puerto-Rico."

PARTE OFICIAL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan de Puerto-Rico, á veinte y dos de Mayo de mil novecientos dos, en la causa civil por divorcio seguida ante el Tribunal de Distrito de Humacao, por Carolina Luzunaris, como menor de edad, asistida por su padre legítimo Don Manuel Luzunaris, representada y defendida por el Lcdo. Herminio Diaz Navarro, con su esposo Ramón Pastor Diaz, representado y defendido por el Lcdo. Juan Hernandez Lopez, pendiente ante este Tribunal, en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el referido Tribunal de Distrito resolviendo incidente previo de nulidad de actuaciones.

1. Resultando que habiendo seguido esta causa los trámites legales hasta el punto de practicar las pruebas correspondientes y por el Tribunal admitidas, la representación del demandado, con previo permiso del Tribunal, propuso oralmente cuestion previa de nulidad de actuaciones, citando el artículo 75 de la Orden General número 118 y fundándose en los puntos siguientes:—1º En la falta de personalidad de la representación ó personalidad que ostenta Don Manuel Luzunaris;—2º En la falta de la citación y emplazamiento del Ministerio fiscal; y 3º En la existencia de cuestiones previas de índole puramente criminal, alegando que no pueden calificarse ni definirse su trámite civil sin términos hábiles para ello.

2. Resultando que los referidos puntos fueron impugnados por la representación de la parte actora.

3. Resultado que el Tribunal sentenciador en la sentencia de trece de Noviembre del año anterior, declaró con lugar el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre nulidad de actuaciones y en consecuencia anuló todo lo actuado en el pleito ordinario desde la omisión de la intervención y emplazamiento del fiscal con las costas de todo lo actuado á la parte demandante, reponiendo las actuaciones á su primitivo estado por si la parte actora usa de su derecho con arreglo al procedimiento.

4. Resultando que contra esa resolución la representación de la demandante en 25 de Enero de 1902 formalizó recurso de casación por infracción de ley, fundándolo en los incisos primeros de los artículos 1687, 1689 y 1690 número 1 del Código de Enjuiciamiento

Civil, y citó como infringido el artículo 63 de la Orden General número 118 de la serie de 1899, porque aun cuando fuese necesaria la intervención del Ministerio Fiscal no es defecto imputable á su representado, y alegó que habiendo la parte demandada propuesta la nulidad de las actuaciones, fundándose en tres puntos distintos y no habiendo prosperado dos de esas pretensiones, no debió el Tribunal imponer todas las costas á la parte actora; cuyo recurso se impugnó en el acto de la vista por la parte recurrida.

Visto, siendo Ponente el Sr. Juez Asociado James H. McLeary.

1. Considerando que habiéndose desestinado el motivo referente á la falta de personalidad de la parte demandante y que tambien se alegó como motivo de nulidad, se trata de un punto de importancia y su negativa implica que no se han estimado todas las pretensiones de esta parte.

2. Considerando que en este concepto se ha infringido la sección 63 de la Orden General número 118 de la serie de 1899.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso por infracción de ley interpuesto por Doña Carolina Luzunaris y en su consecuencia casamos y anulamos, en cuanto á las costas, la sentencia que en trece de Noviembre de 1901 dictó la Corte de Distrito de Humacao.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la "Gaceta oficial", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José S. Quiñones, José M. Figueras, J. H. McLeary.

Publicación: Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Sr. Juez Asociado del Tribunal Supremo Don James H. McLeary, celebrando audiencia pública dicho Tribunal en el día de hoy de que como Secretario certifico en

Puerto-Rico á veinte y dos de Mayo de mil novecientos dos.—Antonio F. Castro.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico, á veinte y cuatro de Abril de mil novecientos dos, en el pleito, pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casación por infracción de ley, seguido en la Corte del Distrito de Mayagüez por los Sres. Sucesores de Esmoris y C^a, sociedad en comandita, domiciliada en dicha Ciudad de Mayagüez, dirigida y representada ante este Tribunal Supremo por el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, contra los Sres. Schulze y C^a en liquidación que no ha comparecido por el estado en que se encuentra el litigio, sobre despacho de ejecución.

Resultando que por escritura pública, primera copia, de treinta de Julio de mil novecientos, los Sres. Schulze y C^a, en liquidación, reconocieron estar adeudando con anterioridad á los Sres. Sucesores de Esmoris y C^a, sociedad en comandita, la cantidad de tres mil doscientos cincuenta y dos pesos, veinte y cinco centavos de moneda provincial y en garantía de esa deuda la sociedad deudora les hipotecó el derecho de hipoteca que ésta tiene constituido a su favor, por escritura de treinta de Abril de mil novecientos, en finca de Don Victoriano Liquez y Cabot por la cantidad de cinco mil ochenta pesos cuarenta y dos centavos provinciales, cuya suma se comprometió á satisfacer Liquez á Schulze y C^a en liquidación en plazos que se determinaron en la referida escritura últimamente citada, venciendo el primero en treinta y uno de Diciembre de mil novecientos y el último en igual día y mes de mil novecientos cuatro.

Resultando que con dicha escritura de treinta de Julio de mil novecientos, inscrita en el Registro de la Propiedad, los Sres. Sucesores de Esmoris y C^a, sociedad en comandita, presentaron, en nueve de Agosto del año próximo pasado, escrito de demanda ejecutiva y solicitaron de la Corte de Mayagüez el despacho de mandamiento de ejecución contra bienes de los Sres. Schulze y C^a, en liquidación, y especialmente sobre

el derecho hipotecado por la cantidad de tres mil doscientos cincuenta y dos pesos veinte y cinco centavos moneda provincial ó sean mil novecientos cincuenta y un pesos treinta y cinco centavos oro americano.

Resultando que dicha Corte, por auto de diez y siete de Agosto resolvió que no había lugar á despachar la ejecución bajo el fundamento de que no estaba vencido mas que un plazo de la hipoteca de Liquez á favor de la sociedad ejecutada, y por consiguiente no podía reclamarse la totalidad.

Resultando que contra dicho auto se interpuso recurso de súplica, por la representación de Sucesores de Esmoris y C^a, que fué denegado por el motivo anteriormente consignado en auto de veinte y cuatro del mismo mes de Agosto.

Resultando que dentro del término se formalizó por la representación de dichos Sres. citados anteriormente, el recurso de casación por infracción de ley autorizado por el número 1 del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como infringidos.—Primero El artículo 107, caso 8º de la Ley Hipotecaria, por aplicación errónea por que dicha disposición no niega el derecho del acreedor á embargar el crédito sub-hipotecado, pues solo dice que quedará sujeto á la resolución de ese derecho, y en ello no hay inconveniente alguno.—Segundo. El artículo 1445 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite embargar en el juicio ejecutivo, los créditos, derechos y acciones del ejecutado, realizables en el acto, y si esto es así, tambien y con mayor razón puede embargarse un crédito hipotecario, máxime cuando ese crédito está sub-hipotecado á favor del demandante.

—Tercero. Los artículos 1427 y 1433 de la citada Ley procesal, y la doctrina legal de que las autoridades judiciales no tienen iniciativa propia, y son puramente pasivas en los asuntos civiles.—Y en tal concepto ha debido despacharse la ejecución, porque sólo al ejecutado correspondía alegar en la oposición las excepciones que autoriza la Ley.

Resultando que dicho recurso se sostuvo en la vista celebrada el doce del corriente.

Visio, siendo Ponente el Juez Asociado Don José María Figueras Chiqués.

1º Considerando que la Corte de Mayagüez ha dado al número 2º del artículo 107 de la Ley Hipotecaria un alcance que no tiene, porque al afirmarse en esa disposición que el derecho de hipoteca voluntaria es hipotecable quedando pendiente la que se constituya sobre él de la resolución del mismo derecho, se refiere única y exclusivamente á los efectos del Registro, regulados en la regla 4ª del artículo 137 del Reglamento y sus referentes 153 y 154 de la Ley Hipotecaria citada.

2º Considerando que hoy no se trata de otra cosa que de una subrogación en el lugar del hipotecario dentro de los límites legales á que alcanza la escritura de sub-hipoteca, sin que para nada influya ni pueda influir en el despacho de la ejecución la circunstancia de estar ó no vencidos los plazos de la hipoteca constituida por Liquez que es el propietario de la finca gravada y que tendrá buen cuidado, si llega á ejecutarse, de que el ejecutante se ajuste á lo estrictamente estipulado en su escritura hipotecaria.

3º Considerando que la Corte de Mayagüez ha cometido las infracciones que se alegan en el recurso.—Fallamos: que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto á nombre de los Sres. Sucesores de Esmoris y C^a, sociedad en comandita, y en su consecuencia casamos y anulamos el auto dictado por la Corte de Mayagüez en diez y siete de Agosto y su concordante de veinte y seis del mismo mes y año próximo pasado; despáchese la ejecución y sustánciese el juicio con arreglo á derecho, á cuyo fin comuníquese con certificación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la "Gaceta oficial", lo pronunciamos, mandamos y